

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTES	Juan Alejandro Daza Figueredo
DEMANDADOS	Agrolab – Socintec y otros
PROCEDENCIA	Juzgado 17 Laboral del Circuito
RADICADO	05001 3105 017 2019 00702 01
INSTANCIA	segunda
PROVIDENCIA	Sentencia Nro. 152 de 2022
TEMAS Y SUBTEMAS	Sustitución patronal, pago de prestaciones sociales, vacaciones, viáticos, incremento salarial y reajuste salarial, horas extras, indemnizaciones por despido injusto y moratoria art. 65 C.S. del T.
DECISIÓN	Confirma sentencia

En la fecha, **quince (15) de julio de dos mil veintidós (2022)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados: Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por las sociedades demandadas, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **Juan Alejandro Daza Figueredo**, contra la **Sociedad Científica de Investigaciones y Tecnología S.A. – AGROLAB – SOCINTEC**; la **Sociedad Investigaciones Tecnológicas y Científicas S.A.S. – TECNOCIN**, y los señores **Hernán Arias Sandoval y José Fernando Vásquez Molina**, como personas naturales, código de radicado único nacional 05001 3105 **017 2019 00702** 02.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 del año en curso, procede a emitir sentencia, según proyecto estudiado, discutido y aprobado en sala virtual, acta **Nro. 21** que se plasma a continuación:

Antecedentes

De acuerdo con el memorial por medio del cual se subsanaron las falencias advertidas por el juzgado de conocimiento, se tiene que el demandante pretende **se declare** en su favor la existencia de relación laboral con la **Sociedad Científica de Investigaciones y Tecnología S.A. – AGROLAB – SOCINTEC (o SOCINTEC S.A.)**, y por sustitución patronal con la **Sociedad Científica de Investigaciones y Tecnológica** (en adelante **TECNOCIN S.A.S.**), con extremos entre el **05 de enero de 2015 y el 23 de mayo de 2019**, siendo su último salario de **\$1.610.000,00**. **Declarar la ruptura del velo corporativo que separa a los socios y representantes legales, José Fernando Vásquez Molina y Hernán Arías Sandoval, de las referidas sociedades**, por sus propios hechos ilegales y de mala fe. **Declarar inexistentes el procedimiento disciplinario y el acto de despido del trabajador Juan Alejandro Daza Figueredo, efectuado por Hernán Arías Sandoval**, sin tener competencia, ni delegación de funciones para esos efectos por parte de las sociedades referidas, y condenar a su reintegro con la sociedad TECNOCIN en el establecimiento de comercio AGROLAB, en su cargo de Coordinador de laboratorio, sin solución de continuidad. **En consecuencia**, se condene solidariamente a las empresas demandadas, por las que actuaron en calidad de representantes legales José Fernando Vásquez Molina y Hernán Arías Sandoval, y a ellos de manera personal, **solidariamente**, como socios

de dichas empresas, por las sumas correspondientes a salarios, con sus incrementos legales y bonificación salarial, primas de servicios con el incremento anual legal y bonificación salarial, incluida la de junio de 2019, vacaciones no pagadas entre enero y mayo de 2019, cesantías incluido el incremento legal anual y la bonificación salarial, intereses a las cesantías, sanción moratoria por el no pago de prestaciones sociales, y todos los rubros que se hayan generado desde la presentación de la demanda hasta el reintegro efectivo, sin solución de continuidad; **subsidiariamente**, pide declarar injusta la causa de terminación unilateral del contrato y como consecuencia, condena a la correspondiente indemnización, y en lo demás las mismas condenas principales, ordenando al empleador expedir autorización para exámenes médicos de egreso, certificado de terminación del contrato para retirar las cesantías definitivas y certificado del tiempo, extremos de servicios, cargo desempeñado y último salario. **Como pretensiones comunes**, reclama lo que ultra y extra petitia resulte probado, la actualización del valor de las condenas y la imposición de costas a las accionadas.

En sustento de ello afirma que, **José Fernando Vásquez Molina, Hernán Arias Sandoval y Cesar Augusto Posada Henao**, son representantes legales de la diferentes sociedades, pero desempeñan sus atribuciones indistintamente, bajo cualquiera de las razones sociales: Sociedad Científica de Investigaciones y Tecnología S.A. – AGROLAB SOCINTEC, Asistencia Agro Industrial Integral Ltda. – AGROLAB Ltda., Investigaciones Tecnológicas y Científicas S.A.S. – TECNOCIN S.A.S.. Que la sociedad AGROLAB – SOCINTEC vinculó al demandante mediante contrato escrito a término indefinido, en el cargo de coordinador de laboratorio en Medellín, el 05 de enero de 2015, sin el incremento legal salarial correspondiente; que asumió el

grado de empleado e inició la ejecución del contrato el 22 del mismo mes, en jornada diurna, **con subordinación en el acatamiento de ordenes ante el superior Edson Luilli Murillo González, cumpliendo horario de lunes a viernes de 8 am - 12 m, 2 - 6 pm, y los sábados de forma intercalada, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde**, ejecutando su actividad con los recursos provistos por la empresa, en sus instalaciones y percibiendo como **último salario \$1.610.000 al mes**, pues se le dejó de pagar la bonificación quincenal sin causa alguna. Que trabajó horas extras diurnas, nocturnas, ordinarias y festivas, las cuales fueron consignadas en planillas de ingreso y egreso a las locaciones de la empresa. **Adicionalmente se le reconoció un bono por valor de \$150.000 quincenales, los que constituyen factor salarial y debieron ser objeto de incremento anual, y tenerse como tal para la liquidación de primas, vacaciones y demás beneficios laborales, bono que se dejó de pagar en diciembre de 2018, lo que constituye una desmejora laboral.**

Indica que en las **jornadas de trabajo por fuera de la empresa se le pagaron rubros a título de viáticos, calculados en forma arbitraria, sin que cubrieran los valores que debían liquidarse, en contra de los intereses del trabajador.** Que durante el desarrollo del contrato no se le efectuó incremento anual de salarios y se le adeudan las últimas cinco quincenas. **Que solo se le cancelaron cesantías en el año 2016,** generándose la correspondiente sanción moratoria por no pago oportuno de prestaciones a partir de febrero de 2018, y lo mismo ocurrió con los intereses sobre las cesantías. Que los últimos aportes a seguridad social a nombre del trabajador fueron asumidos por la sociedad TECNOCIN SAS, operándose una sustitución patronal. Que

reconociendo sus anomalías, los representantes legales de SOCINTEC S.A., José Fernando Vásquez Molina y Hernán Arias Sandoval firmaron un compromiso para con los trabajadores el 04 de marzo de 2019, indicando que reconocen las deudas laborales pendientes y que las cancelarían a satisfacción de los empleados, y en un evidente acto de mala fe Hernán Arias Sandoval, en calidad de representante suplente de la sociedad AGROLAB – SOCINTEC, puso fin a la relación contractual a partir del 23 de mayo de 2019, realizándosele al trabajador un falaz procedimiento disciplinario previo que constituyó un despido injusto, pues se fundó en causales inexistentes, toda vez que no hubo comisión de ilícito penal, pues ni siquiera se interpuso denuncia y menos hubo condena por la conducta punitiva que se le achacaba y, el accionante presentó solicitud para disfrute de vacaciones del período enero 2018 a enero 2019, entre el 2 y el 20 de mayo, desde el 15 de marzo de 2019, con aprobación del superior Edson Luilli Murillo, solicitud recibida por Hernán Arias Sandoval, frente a la que no existió respuesta. Agrega que el procedimiento disciplinario fue engañoso porque no se dio preaviso legal con 15 días de antelación en relación con la causas de supuesto abandono del trabajo, y no se le hizo entrega del acta al encartado para su defensa, a lo que se suma que ni José Fernando Vásquez Molina en calidad de representante legal principal, ni Hernán Arias Sandoval como suplente tenían la facultad estatutaria de remover empleados, pues dicha atribución era de la junta directiva como lo consagra el numeral 5º de las funciones del gerente estipuladas en el certificado de existencia y representación legal de SOCINTEC, pero además Hernán Arias Sandoval no funge como representante legal, ni tuvo delegación de funciones por parte de TECNOCIN SAS para efectuar el procedimiento disciplinario previo a la emisión del acto de despido del trabajador, por lo que tal acto es inexistente, procediendo el reintegro con el pago de

todas las acreencias laborales. Que al demandante no se le expidió autorización para examen médico de egreso. Que los señores José Fernando Vásquez Molina y Hernán Arias Sandoval son directamente responsables de los actos ilegales que cometieron como personas naturales a través de las sociedades demandadas y por la ruptura del velo corporativo, en relación con los salarios, incrementos legales anuales, primas de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, sanción moratoria por el no pago oportuno de prestaciones sociales, indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa y las últimas vacaciones. Que ante la no comparecencia de los citados como personas naturales a audiencia de conciliación ante la Inspección del Trabajo de Medellín – Dirección Territorial de Antioquia, **se deben tener por ciertos los hechos susceptibles de confesión, en concreto el relacionado con la existencia de un contrato extra laboral para atender cuarentena de las subastas de la zona norte de Antioquia a partir de agosto de 2018, celebrado entre el demandante, Edson Luilly Murillo González y José Fernando Vásquez Molina, cuyos ingresos irían a la cuenta personal del primero,** de lo que tenía conocimiento el señor Arias Sandoval, sin opinar sobre su desarrollo y que el señor Hernán Arias Sandoval sabiendo de la solicitud de vacaciones por reporte al correo institucional se equivocó al desconocer que su hermana Yolanda Arias Sandoval en calidad de jefe de personal, el 15 de marzo de 2019, dio visto bueno y aprobación para el disfrute a partir del 02 de mayo de 2019.

En virtud del recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante contra el auto que rechazó la demanda por no haberse subsanado los defectos advertidos, esta Sala estimó que con el nuevo escrito se observaron a satisfacción los supuestos del Estatuto Procesal

Laboral, revocando tal decisión, y el Juzgado de conocimiento en auto del **10 de julio de 2020**, admitió y ordenó dar trámite a la acción. Debidamente enteradas de la actuación, las sociedades demandadas, por conducto de apoderado allegaron escritos de contestación, así:

La compañía **Investigaciones Tecnológicas y Científicas SAS, TECNOCIN SAS**, acepta la suscripción de contrato de trabajo a término indefinido del demandante con **Socintec**, cargo inicial, **analista de laboratorio**; los demás supuestos **no le constan o son falsos**, precisando pues los señores Hernán Arias Sandoval, José Fernando Vásquez Molina y Cesar Augusto Posada Henao, no desempeñan indistintamente y de manera indiferente sus atribuciones en las sociedades accionadas, lo que resulta además un imposible jurídico; el aumento anual de salarios está previsto para los equivalentes al mínimo legal; no se prueba la existencia de bonificación que se afirma se le dejó de pagar; frente a las horas extras deberá demostrar las laboradas y que no fueron canceladas; la relación laboral se dio por finalizada con justa causa, ya que el trabajador recibió en su cuenta personal pagos de varios clientes de la compañía sin informar, ni reportar tales dineros, y se ausentó de su trabajo por más de quince días tras haberse “**autoconcedidose**” de manera unilateral e inconsulta un periodo de vacaciones, y a pesar de la gravedad de las faltas y de no ser el despido una sanción, se procedió a su citación a descargos y tras escucharlo, se decidió finalizar con justa causa su vinculación, teniendo el señor Hernán Arias Sandoval autorización para despedirlo, porque el certificado de existencia y representación legal indica que el gerente removerá por autorización de la junta directiva a los trabajadores que esta ordene contratar, sin que tenga limitación para despedir otros empleados. **Se opuso** a la prosperidad de las pretensiones y formuló **las excepciones** de justa causa para la

terminación del contrato, cumplimiento de las formalidades del proceso disciplinario, inexistencia de sustitución patronal y prescripción extintiva.

La **Sociedad Científica de Investigaciones y Tecnologías S.A. – SOCINTEC S.A.**, admite la suscripción de contrato laboral con el demandante, a término indefinido, el salario y el no incremento anual, pues este solo aplica para montos iguales al mínimo legal. Sobre los demás supuestos replica el pronunciamiento efectuado por la compañía **Tecnocin S.A.S.**, proponiendo idénticos medios exceptivos.

La primera instancia terminó con **sentencia** proferida por el **Juzgado 17 Laboral del Circuito**, declarando la existencia de contrato de trabajo entre el señor **Juan Alejandro Daza Figueredo** y la **Sociedad Científica de Investigaciones y Tecnología S.A. – AGROLAB – SOCINTEC** y posteriormente con la **Sociedad Científica de Investigaciones y Tecnológicas S.A. – TECNOCIN-** entre **el 06 de enero de 2015 y el 23 de mayo de 2019**, en el cual operó **sustitución patronal**, por lo que les impuso **condena solidaria al pago de cesantías y reajustes adeudados, intereses a las cesantías, primas de servicio, vacaciones, indemnización por despido, sanción moratoria y costas procesales, fijando el monto de las agencias en derecho. Absolvió** de las restantes súplicas a las personas jurídicas y en tu totalidad de las dirigidas contra los señores José Fernando Vásquez Molina y Hernán Arias Sandoval, como personas naturales. Declaró parcialmente probada la excepción de prescripción **frente a las horas extras anteriores al año 2016**, las demás implícitamente resueltas.

La falladora, luego del análisis de la prueba allegada, encontró acreditados los supuestos para afirmar que existió sustitución patronal entre las sociedades accionadas, pues con comunicación del 04 de marzo de 2019, suscrito por José Fernando Velásquez Molina y Hernán Arias Sandoval, en calidad de gerente y subgerente, se le informó al demandante por parte de **TECNOCIN** que asumiría las obligaciones de vigencias anteriores al mes de febrero de 2019, solicitándole no prestar atención a comentarios despectivos que lo único que generan es deterioro del clima de la organización, ***por tanto es nuestra invitación a guardar cordura y tranquilidad y centrar esfuerzos en la construcción de un nuevo AGROLAB – TECNOCIN S.A.S. que cumpla con todas las satisfacciones de todos los empleados,*** lo que sumado al testimonio de la señora **Cristina Muñoz Berrio**, quien ostentaba el cargo de asistente administrativa, con funciones de manejo de personal, seguridad social y cartera, y era la persona de confianza de la empresa **Socintec**, quien manifestó que a finales de 2018 todos los trabajadores de **Socintec** pasaron a **Tecnocin**, y se redireccionó la facturación a esta sociedad porque las cuentas de Socintec estaban embargadas por la DIAN; y el testigo **Edson Luilly Murillo González**, que era el jefe directo del demandante en **Socintec** y siguió en la misma condición en **Tecnocin**, con las mismas labores, no queda duda de la sustitución patronal, generándose además una confusión en quien era realmente el empleador del demandante a partir del mes de febrero de 2018, pues ambas sociedades, de acuerdo con el certificado de Cámara de Comercio, funcionan en el mismo lugar, Calle 33 Nro. 76-44, ello sumado al registro de aportes en la historia laboral en la que hasta el mes de febrero de 2019 figura como empleador la Sociedad Científica de Investigaciones y Tecnología S.A. – AGROLAB – SOCINTEC y a partir de marzo del mismo año Investigaciones y Tecnologías Científicas S.A.S., efectuándose el

despido por el representante legal suplente de la primera compañía, esto es SOCINTEC S.A. imponiendo así condena solidaria a las sociedades demandadas, pero excluyendo de la misma a los señores **José Fernando Vásquez Molina y Hernán Arias Sandoval**, como personas naturales, por estarse ante sociedades de capital y no de personas; **establecidos los extremos de la relación laboral y el empleador, pasó a analizar los conceptos reclamados constitutivos de salario**, a efectos de definir su monto, **precisando**, que ha sido criterio reiterado de la jurisprudencia especializada en línea reiterada, que el ajuste anual de salarios superiores al mínimo es un asunto de carácter económico frente al que el juez del trabajo carece de competencia para su pronunciamiento, y estando el demandante en esa situación no es posible el incremento reclamado; frente a las **horas extras**, no quedaron debidamente acreditadas, pues de un lado, en el escrito de demanda se confiesa que el horario era de 8 am – 12 y 2 – 6 pm y aunque se afirman labores en horas extras diurnas y nocturnas, ordinarias y festivas, de las planillas aportadas no se infieren las mismas, y aparte de ello existía un acuerdo privado entre los señores **José Fernando Vásquez Molina, Edson Lully Murillo González y el demandante**, ejecutando actividades en horario adicional, sin que sea posible determinar qué actividades correspondían a la empresa y cuales al acuerdo privado, y en gracia de discusión **las anteriores a febrero de 2016 se encuentran prescritas, único concepto frente al que se declaró configurado este medio exceptivo**, y las **restantes no se acreditan tampoco con las planillas allegadas**. Frente a la **bonificación constitutiva de salario**, no es claro su valor, ni su periodicidad, pues la testigo **Cristina dice que se le entregan directamente \$250.000 quincenales y en la demanda se dice que eran \$150.000; luego el único salario demostrado**

fue el de \$1.610.000, y sobre él se liquidaron cada una de las acreencias, argumentándose:

- **Cesantías**, encontró debidamente acreditado el pago de las correspondientes a los años 2015 y 2016, y también confesó el demandante en su interrogatorio que **en el año 2018 recibió las de 2017**, teniéndose frente a este concepto que opera la prescripción solo a partir de la fecha de terminación del contrato, **por lo que se adeudan los siguiente valores:** reajustes años 2015 y 2016 \$129.694 y \$80.500; completas las del año 2018, que ascienden a **\$1.610.000** y por la fracción de **2019 \$612.000**, para un total por este concepto de **\$2.432.889**.
- **Intereses a las cesantías**, fueron pagados los de los años 2015, 2016 y 2018, adeudándosele los de 2017 y fracción de 2019 por valores de \$193.200 y \$27.800 en su orden, para un total de **\$221.180**.
- **Primas de servicio**, en el interrogatorio refirió que solo le adeudan el último periodo, esto es entre el mes de enero y el 23 de mayo de 2019, **\$616.167**.
- **Vacaciones**, en el interrogatorio afirmó que solo le adeudan la última fracción, estando acreditados los pagos de periodos anteriores a fls 671, 672 y 673, y el disfrute de las del 2018, que fue lo que dio lugar al despido al afirmarse que no fue autorizado, deuda **\$317.528**.
- Frente a la **terminación del contrato**, explicó la falladora que debe existir procedimiento previo siempre y cuando el mismo este previsto en el laudo, convención o reglamento interno, no quedando ello demostrado, y aún así, se citó al demandante a diligencia de descargos previo a tal decisión, luego no existió vulneración al debido proceso, por lo que no hay lugar a declararlo ineficaz, y tampoco se puede afirmar que el señor **Hernán Sandoval Arias**, representante legal suplente de **Socintec S.A.**, empleador, no tuviera facultad para despedirlo, pues no está el demandante dentro de las personas para cuyo nombramiento se requiera autorización de la junta directiva; razón por la que estudió la pretensión subsidiaria, no encontrando acreditadas las causales de despido invocadas, pues el demandante solicitó en forma oportuna vacaciones, obteniendo visto bueno, quedando solo pendiente la verificación del periodo al que correspondían, e incluso fueron pagadas; y **la apropiación de dineros** no quedó evidenciada, pues la testigo **Cristina** explicó que el pago de facturas a favor de **Socintec fue redireccionado a Tecnocin** porque se tenía embargo de la DIAN, y aparte de ello, el demandante tenía un acuerdo privado de subastas con **José Fernando, representante legal de la compañía y Edson Lully Murillo González**, por el que también recibía dineros, luego no existe claridad si en realidad recibió dineros de la compañía o por el acuerdo privado y si estaba o no autorizado para ello, por lo que **impuso condena a indemnización por despido, tasada en \$5.244.307**.

- Finalmente, al evidenciar mala fe en la conducta asumida por la sociedad empleadora – Socintec S.A.-, al punto que para burlar las obligaciones ante la DIAN redireccionó el pago de facturas a Tecnocin, **denotando ello evidente mala fe**, pues si se desconocen las obligaciones fiscales, mayor riesgo corren las laborales, y adeudándose los conceptos por los que se impuso condena, sin que se haya efectuado pago en el transcurso del proceso, tasó la **indemnización moratoria del art. 65 del C. S. del T.** en la suma de **\$38.693.667,00**, calculada entre el 23 de mayo de 2019 y similar fecha del 2021, a partir del 24 de mayo de 2021, se continuaran pagando intereses moratorios.

Ambas partes manifestaron inconformidad mediante **recurso de apelación**, en los siguientes términos:

Demandante: afirma que el despacho inició acogiendo sus planteamientos, pero al final terminó haciendo concesiones a los accionados y no aplicando la ley con la drasticidad debida, salvando de muchas condenas a las accionadas Socintec – Agrolab, Tecnocid, usadas indistintamente en la contratación del demandante, en virtud de ello **apela** la decisión, pues no fue tomada en cuenta la normatividad y jurisprudencia, y tampoco la existencia de confesión de la mayoría de los hechos, para al final terminar diciendo que no fueron suficientemente demostrados, pues al existir confesión y adicionalmente el grave indicio en contra de la demandada, debió considerarse que sobre ella recayó la carga de probar lo contrario, adicionalmente **el hecho de no haber incluido a las personas naturales como deudoras**, cuando durante todo el tiempo se demostró y evidenció en los testimonios que el señor **José Fernando Vásquez Molina tenía facultades de tomar determinaciones de forma autónoma y fue responsable de la vinculación y desvinculación de Juan Alejandro Daza**, entonces estos extremos debieron tenerse en cuenta al proferir el fallo e incluir al señor a **José Fernando Vásquez Molina dentro de las condenas, además fue**

evidente posición de Hernán Arias Sandoval, en relación con los hechos que figuraron en el proceso y entró en varias contradicciones procurando ocultar la realidad, lo que lo pone en condición de responsable del despido del demandante, porque no se prevaleció de las facultades para el efecto y no tenía la potestad para tomar las decisiones, y menos aun fallando a la verdad, por tanto fue responsable que el demandante dejara el trabajo y debe asumir solidariamente las condenas.

En relación con la justa terminación del contrato, coincide con la sentencia, en cuanto no existió la apropiación de dineros indebida y la ausencia injustificada al trabajo, pero en cuanto al cumplimiento de las formalidades del proceso disciplinario la juez debió tener en consideración que la carga de la prueba acerca de la asunción de las normas internas para el efecto corría por parte de la demandada, quien no aportó, habiéndosele solicitado por exhorto, ni siquiera el reglamento interno de trabajo por medio del cual debía regirse procedimiento disciplinario, debiendo interpretarse en contra de ella esa actividad y hacer evidente la falta de garantías procesales que ocurrieron allí. Además, coincide en cuanto a la existencia de la sustitución patronal por todos los motivos esbozados en la demanda, alegatos y la sentencia.

En cuanto a prescripción extintiva como bien lo indicó la juez se firmó documento en 2019 que renovó todas esas acreencias a favor de Alejandro Daza y por tanto la existencia de dudas entre 2015 y 2016 era nuevamente reconocida por la empresa y por ello, desde ese momento debía contarse el término hasta la instauración demanda, no habiendo transcurrido dos años y en ese aparte se contraría la parte

motiva con la resolutive, por lo que solicita pronunciamiento al respecto.

Para el recurrente erró la juez puntualmente en cuanto a los rubros por los que condenó, aduciendo que las horas extras no fueron suficientemente demostradas, porque había confusión entre trabajos realizados por el compromiso entre el demandante, José Fernando Velásquez y Edson Luilly Murillo, **más no tuvo en cuenta la providencia que en testimonio este último dijo literalmente que el trabajo adicional solo podía ser efectuado en fines de semana**, por imposibilidad física para realizarlo otro día, porque en ese mismo periodo, fin de semana, es decir, en domingo, por fuera del horario laboral, era que se realizaban las subastas y en ese mismo término tenían que presentarse los resultados, **por tanto no había confusión, porque este testigo afirmó que el demandante laboraba cuatro horas diarias adicionales a la jornada convenida**, además no todas las planillas fueron aportadas sino aquellas que convinieron a la parte demandada, conducta de mala fe que también debe ser interpretada en contra de ellos y por tanto, debe tenerse por cierto lo afirmado por el referido testigo.

Agrega que también se negó **el aumento del salario**, cuando la misma parte demandada confesó que tenía establecido incremento del 90% del IPC del año anterior, tal como lo explicó el apoderado judicial en intervención, y por tanto, al tenerlo ellos claro debieron activar esa convención y aumentar el sueldo del demandante de acuerdo con ese 90% del IPC.

En cuanto a la **no especificidad del bono**, en realidad la juez hace cierta alusión a la existencia del mismo, **pero no lo concreta por el hecho de que no hubo consistencia en cuanto a valor y**

periodicidad, en razón de esta situación el mismo señor Hernán Arias Sandoval confirmó la existencia de ese bono, no sabía cuánto era y como se pagaba, y la señora María Cristina dice que \$250.000 quincenales y en la demanda se puso valor distinto, por tanto ante la existencia de la acreencia debía ser por lo menos por la menor de la cifras, por lo que no se podía desdeñar del todo la prueba que se logró juntar y evidenció la existencia y entidad del bono en unos mínimos.

Respecto a **las cesantías**, téngase en cuenta que no cabe la aplicación de los dos años, porque como se dijo, esa acreencia fue renovada por la parte demandada expresamente mediante escrito en que reconoce que va a pagar todas las acreencias atrasadas, y por tanto desde esa época, 2015 y 2016, cuando se demostraron pagos parciales y que quedó saldo pendiente, debió imponerse condena por tales y por la sanción moratoria, e igualmente **por los intereses a las cesantías** debidos, pues quedó demostrada la mala fe ante el no pago total de tales acreencias.

Adicionalmente, debe observarse en relación con los salarios que se deben por **la pretensión del reintegro** planteada como principal en la demanda, que la sentencia de unificación efectivamente consagra que la terminación del contrato no es sanción, pero no se tuvo en cuenta que al realizarse este procedimiento disciplinario y considerarse por parte de la Corte Constitucional que debía existir un derecho de defensa, el mismo no debe ser meramente formal sino efectivo, que se pueda evidenciar, y el hecho que el demandante no haya tenido el termino para presentar previamente o haber logrado juntar las pruebas con los 15 días que la norma le concede previo a la audiencia de descargos, y habiendo dado hechos no tenidos en cuenta al citársele a descargos y haber presentado prueba durante la diligencia y que todo

esto no se haya tenido en cuenta al instante de proferir la decisión por la entidad empleadora, **entonces deja ver que no hubo real existencia de derecho de defensa para el demandante**, en ningún momento se analizaron los hechos que él propuso, ni las pruebas que él aportó para tomar la decisión, ni para decir que existieron o no o que fuera real, falsa o controvertirla con otros elementos probatorios, por tanto no fue real la defensa del demandante dentro del falso procedimiento sancionatorio.

También deja evidenciado que **no hubo alusión en cuanto a los viáticos**, que también fueron demandados y solicitados dentro las pretensiones, en donde el señor Hernán Arias Sandoval admitió que el demandante trabajó y apoyó procesos por fuera de las instalaciones del laboratorio y como dijo Edson Luilly Murillo, que era para conseguir clientes y la frecuencia con que se realizaba, debiéndose tener en consideración este concepto a la hora del fallo.

Solicita examinar los tópicos puntuales en los que se separó la sentencia de lo solicitado en la demanda y se concedan los rubros y estipendios peticionados.

El apoderado de las sociedades **demandadas**, considera claro que ambas compañías eran muy unidas, existiendo un contrato de colaboración al que no se hizo alusión expresa en la contestación de la demanda, pero con la prueba quedó demostrado que compartían sedes, y algunas facilidades dentro de sus actividades, pero eran dos compañías diferentes, con personalidad jurídica distinta, NIT y objeto social diferente, calificando como malintencionada la confusión planteada por el demandante para hacer creer que eran la misma, lo que no es así, pues para demostrarse tal tesis debió acreditarse coincidencia entre los accionistas de una y otra, que las dos fueran

propietarias del mismo establecimiento de comercio, que no lo eran, pues una era TECNOCID y otro AGROLAB; siendo también claro que ambas compañías tenían actividad comercial diferente, pero con remisión de clientes en virtud de permisos de AGROLAB y la capacidad de comercialización de TECNOCID, pero no por ello existía identidad de misión entre una y otra, insistiendo en la existencia de un contrato de colaboración, para luego analizar el punto relativo a la **sustitución patronal**, frente al que la Corte Suprema de Justicia en múltiples decisiones, una de ellas el caso de UNE y EADE, resume en dos renglones los requisitos para esta opere: **1.** cambio de patrono, **2.** Continuidad de la empresa y **3.** Continuidad del trabajador. Analizados uno por uno estos requisitos con lo probado demostrado y no acreditado, **respecto cambio de patrono**, queda comprobado y de acuerdo a la tesis despacho demostrado, que la sociedad que contrató al trabajador fue AGROLAB y continuó como empleadora a lo largo de la vinculación, pues todos los pagos fueron efectuados por esta **y aunque dentro del contrato de colaboración se pudo haber pedido apoyo para una actividad puntual de TECNOSIN, podría ser bajo la modalidad de trabajador en misión, típico del contrato de colaboración**, recalando que lastimosamente y por el desorden administrativo advertido, y al que se hizo referencia por la juez, hubo tres periodos de seguridad social cuando AGROLAB estaba ilíquido, que fueron asumidos por TECNOCIN, pero ello no implica prestación del servicio a esta última sociedad, y tampoco remuneración del trabajador por parte de la misma, pues si se observa la planilla de pagos se hicieron por AGROLAB y al momento de terminar el contrato no se vinculó a TECNOCIN, lo hizo AGROLAB como empleador, y fue la empresa que lo llamó a descargos y quien le endilgó de ciertas conductas atentatorias de la relación laboral, no TECNOCIN, de esa manera tiene que afirmarse y no puede sustentarse, que haya existido

un cambio de empleador o cambio de patrono, que es la primera condición para que exista la figura de la sustitución patronal; **respecto a la continuidad de la empresa**, se ha visto que TECNOCIN y AGROLAB, tienen objetos misionales diferentes y con ninguna prueba se pudo demostrar que el trabajador estuviera prestando sus servicios a TECNOCIN, **difiere totalmente del juzgado porque lo que hubo fue un contrato de colaboración, incluso un préstamo de una sociedad a otra que el juzgado entendió de manera diferente;** y **respecto de la continuidad del trabajador**, cuando hay sustitución patronal hay una sociedad A y el trabajador pasa a prestar servicios a una sociedad B y cuando finaliza el contrato por la sociedad B, se configuraría este requisito para la figura de sustitución patronal, y en este caso el trabajador no tuvo continuidad en la relación laboral con TECNOCIN, lo que queda evidenciado con la terminación del contrato de trabajo por AGROLAB, reitera, para que la segunda instancia lo considere, cuando se presenta proceso de despido, la facultad sancionatoria del empleador estaba en cabeza de AGROLAB y el hecho de que existieran tres pagos por TECNOCIN no demuestra remuneración, ni subordinación, pues los pagos de remuneración estaban en cabeza de AGROLAB.

Agrega el profesional que a pesar de la comunicación de TECNOCIN, donde decía que pagaría al trabajador deudas anteriores, se demostró que la remuneración estuvo en cabeza de AGROLAB, sin que exista confesión del representante legal, **pero dada la colaboración y cercanía de las dos empresas, no es sustento para declarar la sustitución patronal que TECNOCIN le prestara dinero a AGROLAB** para que pudiera pagar sus trabajadores, **acudiéndose a la figura civil de pago de obligaciones por cuenta de terceros**, y de esa manera TECNOCIN permitió que AGROLAB siguiera

desarrollando su actividad comercial, sin que, insiste, existiera subordinación del demandante frente a TECNOCIN como lo entendió el juzgado.

Se dice hubo un embargo por parte de la DIAN a AGROLAB, lo que es cierto, y que TECNOCIN apoyó recibiendo dineros, lo que no es indicativo de mala fe para con las obligaciones de los trabajadores, pues se hilan dos circunstancias diferentes.

Respecto de **la terminación del contrato de trabajo**, se separa de la tesis del despacho y solicita acoger el argumento de la defensa, porque no es razonable decir que el trabajador notificó al empleador de la fecha en que iba a tomar vacaciones, y que se aceptó por conducta concluyente, pues la legislación laboral dice que es el empleador quien fija la fecha de disfrute de la vacaciones y aquí el señor Hernán Arias dio respuesta parcial, el trabajador dijo voy a solicitar vacaciones y el empleador le respondió que verificaría la fecha a la que correspondían, sin que se pueda aceptar como una orden las fechas fijadas por el trabajador, porque ello desnaturaliza la subordinación laboral. **Y frente al recibo de dineros, en la audiencia de descargos se aportaron unos pagos sobre los que no se tiene claridad si son de la compañía o del convenio del demandante con los otros dos señores**, debiéndose apelar a la sana crítica, pues por sentido básico, si esos negocios entre tres personas fueran realmente ciertos y esos dineros correspondieran a esa negociación o prestación de servicios que se estaba ejecutando, porque los clientes de AGROLAB dicen que realizaron la consignación por un servicio si era un negocio ajeno a esa entidad?, y no se dijo que era tratos personales con el demandante o los dos socios, por lo que si se estructuró la justa causa del despido.

Respecto de **la prescripción**, se acoge de la tesis del despacho y se separa de la del accionante, estando prescritas las obligaciones sobre las que transcurrieron tres años, salvo las cesantías, sin que se haya renunciado a ella, pues TECNOCIN no fue empleador del demandante, simplemente prestó un dinero a AGROLAB.

Frente a **las cesantías del año 2018**, la prueba documental es abrumadora y reconoce que efectivamente el juzgado hizo un esfuerzo muy grande para el análisis de la misma, pese a lo voluminoso de la documentación contrario a lo que afirma el demandante que solo se allegó lo que a la empresa le convenía, estima que se atendió la instrucción del despacho, **obrando en la foliatura soporte del pago de cesantías del año 2018; comparte también el recurrente la absolución de las personas naturales por estarse ante sociedad de capitales y no de personas**, agregando que pese al desorden administrativo la sociedad siempre informaba a los trabajadores los hechos relevantes, por ejemplo, el disfrute de vacaciones y la fecha en que lo harían, para lo que enviaba un correo, **y frente al cambio de empleador, uno de los testigos que si trabajó para para SOCINTEC, indicó que a él si le finalizaron el contrato, lo liquidaron, y posteriormente fue vinculado por TECNOCIN, procediéndose igual con los demás empleados**, entonces bajo ese esquema se debe decir que a todos los que pasaron a TECNOCIN se les avisó y liquidó el contrato, menos al demandante, tesis que no es aceptable, porque no hay bajo los esquemas presentados algo que demuestre que Alejandro Daza haya prestado servicios de manera personal a TECNOCIN, esa es la prueba angular que no se puede excusar, ni el no pago de unos conceptos durante la relación laboral, de no haberlo hecho hay que honrarlos, pero no se

debe admitir, ni procesalmente tolerar, que se endilgue responsabilidad a TECNOCIN por aparente confusión de sociedades, cuando no se demostró la continuidad de la prestación de servicios en favor de esta sociedad, carga que correspondía al demandante. Y si **se hablara del contrato realidad**, a la parte demandante se le obliga a demostrar la remuneración, y en este caso queda probado que fue cubierta por AGROLAB, sin que se haya discutido siquiera la prestación del servicio para TECNOCIN. En vista de esto no se debe aceptar la declaración de sustitución patronal, debiéndose revocar la sentencia en este apartado, y también al pago de cesantías, por lo menos del año 2018, que ya fueron canceladas y los intereses a esas cesantías y declarar que el contrato terminó con justa causa.

De la oportunidad para presentar alegatos ante esta instancia hicieron uso ambas partes así:

El apoderado del **demandante**, se refiere inicialmente a los argumentos de la apelación de la parte demandada, los que a su juicio no encuentran sustento, pretendiéndose crear una realidad alterna a la acreditada procesalmente, pues no es cierto que las demandadas fueran sociedad diferentes, por el contrario, ambas tienen exactamente los mismos códigos CIIU de actividad comercial 8691, 8692, 7120 y 7210; ambas sociedades, AGROLAB – SOCINTEC y TECNOCIN, identifican al demandante como su empleado, **al punto que en documento del 04 de marzo de 2019**, el que transcribe, TECNOCIN asume las obligaciones anteriores al mes de febrero del mismo año, por lo que no hay lugar a aplicar prescripción; ambas sociedades compartían la misma sede física y compartían clientes, como quedo evidenciado con la prueba testimonial, tampoco puede considerarse al demandante como trabajador en misión y no se

demuestra la existencia de préstamo realizado por TECNOCIN a SOCINTEC. Agrega que el apelante confiesa que por desorden administrativo TECNOCIN recibía ingresos de SOCINTEC para evadir los embargos de la DIAN, lo que constituye una conducta defraudadora, siendo tan protuberante el comportamiento antijurídico asumido que la juez vislumbró que ambas son la misma sociedad, simplemente cambiaron razón social, pero la estructura es igual, y con fundamento en el artículo 42 de la Ley 1258 de 2008, se pudo imponer condena a los representantes legales **José Fernando Velásquez Molina y Hernán Arias Sandoval**; y tampoco el hecho de programar el trabajador vacaciones, comunicarlas a la empresa y recibir respuesta parcial desnaturaliza la subordinación propia del vínculo laboral,

Frente a las inconformidades con la sentencia, sustenta jurisprudencialmente las razones por las que se debe imponer condena a los representantes legales como personas naturales, pues si bien hay limitación de responsabilidad en las sociedades de capital, esta se encuentra condicionada a que no sea utilizado con abuso del derecho para defraudar a terceros, entre ellos los trabajadores; también estima **equivocada la apreciación de la juez en cuanto a la aplicación de la providencia SU 449 de 2020,** pues debieron ser suficientemente probados los hechos endilgados para el despido, **sin que se le hubiese garantizado el derecho de defensa dentro del proceso disciplinario,** pues no se le otorgaron 15 días para recaudar las pruebas, y al no darle valor a las aportadas se hizo un falso proceso sancionatorio, convalidando la juez la facultad de Hernán Arias Sandoval para despedir en función de su cargo, cuando estaba limitado al no ser representante legal de TECNOCIN, manifestando el trabajador al momento del despido sus inconformidades, sin dársele tramite a las mismas; luego al no haberse tramitado debidamente el

proceso disciplinario, garantizando los derechos de defensa y contradicción del imputado, no se puede tener como existente el acto de despido, procediendo entonces el reintegro del trabajador.

Precisa que las sumas solicitadas en la demanda fueron debidamente calculadas, confirmándose por la juez que con el documento de sustitución patronal se renovaron las deudas **laborales desde 2016**, debiéndose cubrir las misma con la correspondiente indemnización moratoria. Para el profesional, ***no cabe afirmar confusión en relación con el tiempo de las horas extras y el dedicado al negocio extra-laboral de las SUBASTAS, en tanto que sobre este último el testigo Edson Luilli Murillo dijo que ese trabajo era solo de domingos. En cambio sí se dijo que eran al menos 4 horas diarias adicionales las que trabajaba Juan Alejandro Daza Figueredo de lunes a sábado***, sumándose a ello que la juez se contrapone a normas supranacionales, incluido el bloque de constitucionalidad y la voluntad de las partes frente al incremento salarial anual, pactado en un 90% del IPC, considerando también plenamente demostrado del ***bono que se pagaba, la sola mención contrapuesta de unos (si eran \$250.000 ó \$150.000 y si eran quincenales o mensuales), no derivan en su inexistencia, sino que debía haberse establecido por sus mínimos, en aplicación del principio pro operario.***

Por último, **reclama pronunciamiento expreso sobre los viáticos**, pues el demandado Hernán Arias admitió la existencia de procesos por fuera de las instalaciones de la empresa y el testigo Edson Luilli Murillo aclaró que era para conseguir clientes. Ruega atender las súplicas de la demanda en su totalidad y en la plenitud de sus responsables.

El apoderado de TECNOCIN SAS, solicita *revocar la sentencia de primera instancia, cuando menos, en lo referente a la sanción moratoria... por cuanto el juez de primera instancia basó como único fundamento de la mala fe... el*

que la sociedad utilizara la recepción de la cuenta de uno tercero para efectos de recibir dineros de sus clientes en razón de un embargo que contra aquella impuso Industria y Comercio. La injerencia lógica del juez fue que si se utilizaba la cuenta de un tercero para "evadir" el embargo de un dinero, lo cual constituía mala fe, evidentemente también existiría mala fe al no pagar los rubros a que fue condenada la apelante en favor del demandante. Dicho argumento... no puede ser de recibo, toda vez que evidentemente se trata de dos circunstancias totalmente separadas e inconexas la una de la otra, de suerte que es ilógico sostener que el no permitir que unos dineros de la compañía se inmovilizaran debido a un embargo sean prueba suficiente de la mala fe del no pago del empleador de ciertos rubros laborales. Concluye peticionando tener en cuenta que la empresa ha pagado a los trabajadores con gran esfuerzo debido a su grave crisis económica, siendo prueba de ello el embargo de Industria y Comercio por la no cancelación de obligaciones fiscales, preguntándose si aun conociendo las responsabilidades, si un administrador contara con recursos para ello, dejaría de pagar impuestos, dejaría embargarse y no pagaría salarios y seguridad social de sus trabajadores, lo que en este caso no fue posible cumplir por carecer de flujo de caja, como consecuencia de una grave crisis económica y no de mala fe de la empresa.

En orden a decidir, basten las siguientes:

Consideraciones:

Como hechos debidamente acreditados, incluso declarados por la falladora de primer grado sin reparo alguno, se tienen: que el señor **Juan Alejandro Daza Figueredo**, suscribió contrato de trabajo a término indefinido con la **Sociedad Científica de Investigaciones y Tecnología S.A. – AGROLAB - SOCINTEC S.A.**, el **06 de enero de 2015**, desempeñando el cargo de **analista laboratorio veterinario**,

vínculo finalizado el **23 de mayo de 2019**, invocándose por la empleadora dos conductas que consideró constitutivas de justa causa; que el salario percibido por el demandante durante la vigencia de la relación laboral fue de **\$1.610.000,00**.

De acuerdo al recuento realizado y a las inconformidades planteadas por las partes, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a determinar, en primer lugar, si como lo concluyó la juez de primer grado, existió sustitución patronal entre las sociedades **AGROLAB – SOCINTEC y TECNOCIN SAS**, y si hay lugar a codena solidaria en contra de las personas naturales; luego se definirá lo relativo a la base salarial para liquidar las acreencias adeudadas, debiéndose estudiar en este punto lo inherente a los conceptos de **horas extras, bono salarial e incremento salarial anual**; seguidamente se analizara el punto referido a la **prescripción**, y finalmente, **si hay lugar a imponer las condenas reclamadas por la parte demandante, esto es**, inexistencia del procedimiento disciplinario y acto de despido por no tener el señor Hernán Arias Sandoval competencia ni delegación de funciones para ello y como consecuencia, la procedencia o no del reintegro; el pago de las prestaciones y vacaciones reclamadas y, de no acogerse la pretensión principal, la condena por indemnización por despido injusto y la moratoria del artículo 65 del C. S. del T.

Pues bien, tal como se lee en el memorial mediante el cual se subsanaron los defectos advertidos por el Juzgado de conocimiento, al adecuar, aclarar, modificar o retirar pretensiones, en el literal **a)**, textualmente indicó:

*La primera declarativa se modifica, en el sentido de que se pretende la **declaratoria de existencia de relación laboral con las sociedades, no con las personas naturales.***

Y en efecto, la juez **declaró:**

*... la existencia de contrato de trabajo entre **JUAN ALEJANDRO DAZA FIGUEREDO** y la **SOCIEDAD CIENTIFICA DE INVESTACIONES Y TECNOLOGIA S.A. – ABROLAB – SOCINTEC** y posteriormente con la **SOCIEDAD CIENTIFICA DE INVESTIGACIONES Y TECNOLOGIAS S.A. – TECNOCIN** entre el 6 de enero de 2015 al 23 de mayo de 2019, en el cual operó la sustitución patronal., por lo que son **sólidamente responsables.***

El apoderado de las sociedades demandadas al sustentar el recurso manifiesta oposición frente a la declaratoria de **sustitución patronal**, aduciendo que existió **un contrato de colaboración**, en virtud del cual y por la dificultades económicas de **AGROLAB – SOCINTEC S.A., TECNOCID** prestó recursos económicos para cubrir obligaciones laborales, siendo ambas dos sociedades diferentes, **pero al exhibírsele al representante legal el documento con fecha 04 de marzo de 2019**, mediante el cual los señores **José Fernando Vásquez Molina y Hernán Arias Sandoval**, en calidad de gerente y subgerente de **AGROLAB – TECNOCIN S.A.S**, le manifestaron el **compromiso de asumir las obligaciones laborales de manera puntual, a partir del mes de febrero de 2019, y cuando la organización financieramente sea más estable procederemos con la cancelación de las que se encontraban pendientes con los empleados anteriores a esta fecha**, en diligencia de interrogatorio de parte, textualmente explicó:

... cuando yo llegue, 4 o 5 de febrero, al laboratorio e iba diario el Dr. Vásquez por supuesto iba muy preocupado que no había dinero para nada, como no había dinero para nada los empleados empezaron a generar un clima organizacional no favorable en el sentido ahora sí que esto se acabó, entonces el Dr. Vásquez me dijo póngase al frente de esta organización ayúdeme que es lo que esta pasando, pero tenemos que calmar a los empleados, entonces que hacemos, entonces pues yo les dije, pues lo mejor

*es hablar con ellos, tranquilizarlos, mejorar este clima organizacional, las deudas que se tienen para con ellos por nómina porque no había dinero y los dineros se los consignaban a los empleados porque era la situación, entonces sino hay dineros de los clientes vamos a llamarlos y yo personalmente hablé con ellos, vea yo personalmente estoy tomando nuevamente las riendas, el doctor Vásquez me solicita de que le ayude a sacar esta empresa adelante, todos me dijeron hay don Hernán, Alejandro mismo dijo, me alegra mucho que esté aquí para que usted ponga el tatequeto a muchas cosas, él mismo me lo dijo, entonces yo le dije, que comuniquemos por escrito porque eso verbal se lo lleva el... entonces como TECNOCIN le hace préstamos a SOCINTEC, entonces digámosles que TECNOCIN le va a prestar dinero y que ellos estén tranquilos por favor que se les va a ir pagando, entonces nos sentamos el doctor José Fernando Vásquez y yo, esto fue ya yo llevaba como un mes... eso fue un mes después... en el 2019, entonces hicimos el documento para disminuir esa tensión que tenían los empleados respecto a eso, por supuesto algunos empezaron a renunciar... y ya, esa es la historia de ese documento. **P/ por el juzgado, pero es que el documento no dice que es un préstamo que ustedes hicieron, el documento lo que dice es que TECNOCIN va a asumir esas obligaciones, no que TECNOCIN les va a prestar dinero?** **R/** en la contabilidad siempre se mostraban en las cuentas por cobrar y cuentas por pagar los dineros que se le hacían desde TECNOCIN a SOCINTEC, y de SOCINTEC a TECNOCIN, entonces en ese sentido ehhhhhh los dineros se los prestaba TECNOCIN a SOCINTEC atendiendo el problema financiero, siempre los hacíamos así financieramente hablando y ahí aparecen en la contabilidad. **P/ por el despacho, porque razón los logos que se utilizaban básicamente eran los mismos entre TECNOCIN y SOCINTEC?** **R/** la marca, esa es una marca registrada, la marca registrada es AGROLAB, esa es la marca registrada AGROLAB, como marca SOCINTEC se la entregó a TECNOCIN por toda la plata que le debía, porque no había con que pagarla, en la contabilidad también está, y se hizo el documento y se pasó esa marca llamada AGROLAB a TECNOCIN por todos los dineros que le adeudaba AGROLAB – SOCINTEC, entonces AGROLAB es la marca, las personas jurídicas o entes jurídicos son SOCINTEC S.A. – SOCIEDAD CIENTIFICA DE INVESTIGACIONES Y TECNOLOGIA, le cedió la marca a TECNOCIN por todos los dineros que le debía, es por eso.*

El testigo **Edson Luilli Murillo González**, manifestó que trabajó para AGROLAB – SOCINTEC desde el año 2012 y se retiró en el 2018 o 2019, a mediados, también laboró para TECNOCIN los últimos dos años, lo cambiaron de AGROLAB SOCINTEC a TECNOCIN en ese espacio, del 2016 al 2018, firmó nuevo contrato con TECNOCIN, al preguntársele:

P/ sabe y le consta si la empresa Socintec le informó al señor Juan Alejandro Daza que él iba a pasar a ser parte de Tecnocin y que ya no iba a seguir con Socintec? **R/** *no, eso lo hicieron, ... vuelvo y le digo, el manejo que se le dio a la empresa fue por parte de los representantes legales y de los socios, empezó a tener una cantidad de irregularidades,... entonces ellos nos hacían a nosotros, a mí personalmente... nos presentaron el contrato diciéndonos que la empresa cambiaba de razón social y que nosotros firmáramos ese contrato para que nosotros pudiéramos quedar vinculados a la nueva empresa.* **P/usted sabe si en el caso específico de don Juan Alejandro le dijeron eso?** **R/** *en el caso de Juan Alejandro creo que eso no se lo manifestaron sino que eso en planilla lo pasaron directamente allá a TECNOCIN, sin hacerle la respectiva información, porque eso era un mecanismo que utilizaban en la empresa para muchas cosas de manejos administrativos que tenían ellos... a Juan Alejandro no le dieron esa información sino que en planilla lo pasaron a ese sistema.* **P/ Informe al despacho si los directivos laborales, desde el punto de vista que usted maneja que es el técnico y no directivo, de TECNOCIN, SOCINTEC Y AGROLAB eran los mismos o si cambiaban las personas que daban las ordenes a los empleados?** **R/** *eran los mismos, ... ahí tengo que manifestarles algo, ellos utilizaban como un método de evasión de cosas, de responsabilidades, entonces que hacían, solamente cambiaban de razón social, pero las personas seguían siendo idénticamente las mismas y el lugar de la empresa era el mismo domicilio.... que hacían ellos?, Cámara de Comercio, cambiar la razón social, pero todo lo demás seguía siendo igual, seguían siendo las mismas personas, los directivos de la empresa.*

Y la testigo **María Cristina Muñoz Berrio**, quien laboró para la empresa AGROLAB – SOCINTEC desde enero de 2008 hasta febrero de 2019, ocupando el cargo de **asistente administrativa**, siendo sus funciones, encargada de personal, manejo del programa de salud ocupacional y **cartera de la empresa** y también era **auxiliar de tesorería** explica:

A Juan Alejandro Daza lo conoció cuando estaba trabajando en AGROLAB – SOCINTEC, él entró a trabajar allá. **P/ Juan Alejandro en febrero de 2019 pasó a trabajar con la TECNOCID?** **R/** *lo que pasa es que a finales de 2018 todos pasamos a trabajar con una empresa que se llamabas Sociedad Científica de Investigaciones tecnología TECNOCIN, ... eso a todo el mundo no se le dijeron sino que como yo manejaba la parte del cobro de cartera y todo eso, me dijeron que ya la cuenta bancaria iba a ser a nombre de TECNOCIN y que todos los clientes siguieran consignando en esa cuenta.* **P/ A los trabajadores les pagaban de la cuenta de TECNOCID o de la cuenta de SOCINTEC?** **R/** *haber, lo que pasa fue*

que la cuenta de SOCIENTEC en un momento fue embargada, entonces la orden que me dieron a mí fue que cuando cobrara la cartera le dijeron a los clientes que no consignaran en esa cuenta sino en la cuenta que estaba a nombre de TECNOCIN, y esa empresa TENOCIN funcionaba en las mismas instalaciones, eran el mismo dueño, todo era igual. Simplemente distinto era el nombre.

Dichos que sumados a la evidencia probatoria, esto es, certificados de existencia y representación legal de las sociedades demandadas, en los que efectivamente se constata que la dirección era la misma; la comunicación que le fuera remitida al demandante el 04 de marzo de 2019, con logo **AGROLAB – Laboratorio Clínico Veterinario. Aguas/suelos/alimentos – TECNOCIN S.A.S.**, informándosele por parte de los señores **José Fernando Vásquez Molina** y **Hernán Arias Sandoval, en calidad de gerente y subgerente**, que en esta nueva sociedad eran: *conocedores y conscientes de las obligaciones o beneficios que se tienen para con los empleados en vigencias anteriores al mes de febrero de 2019*, comprometiéndose al pago de estas cuando la organización fuera financiera más estable y a cubrir las posteriores a esa calenda, febrero de 2019; el pago de **aportes a seguridad social hasta febrero de 2019 por la sociedad AGROLAB-SOCINTEC y a partir de marzo del mismo año por TECNOCIN**, no dejan ninguna duda de la operancia de una sustitución patronal, pues se satisfacen a cabalidad los supuestos del artículo 67 del C. S. del T. juiciosamente explicados por el apoderado de las demandadas con fundamento en la **jurisprudencia especializada, esto es:** 1. cambio de patrono, para el caso de AGROLAB – SOCINTEC S.A. a AGROLAB – TECNOCIN SAS. 2. Continuidad de la empresa, pues fue confesado por Hernán Arias Sandoval en interrogatorio de parte que: *la marca registrada es AGROLAB, esa es la marca registrada AGROLAB, como marca SOCINTEC se la entregó a TECNOCIN por toda la plata que le debía, porque no había con que pagarla, en la contabilidad también está, y se hizo el documento, y se pasó esa marca llamada*

*AGROLAB a TECNOCID por todos los dineros que le adeudaba AGROLAB – SOCINTEC, entonces AGROLAB es la marca, las personas jurídicas o entes jurídicos son SOCINTEC S.A. – SOCIEDAD CIENTIFICA DE INVESTIGACIONES Y TECNOLOGIA, le cedió la marca a TECNOCIN por todos los dineros que le debía, es por eso y, finalmente, **3. Continuidad del trabajador,** pues para el caso del demandante no le fue terminado y liquidado el contrato anterior, o por lo menos de ello no obra prueba, tampoco suscribió nueva vinculación y por con contrario siguió con la misma actividad, en el mismo establecimiento de comercio, condiciones y con el mismo salario, informándosele por la sociedad TECNOCIN SAS que asumiría el pago de las acreencias pendientes hasta febrero de 2019, luego **se mantiene la decisión en este apartado, e igualmente en la condena solidaria para ambas sociedades.***

Frente a la responsabilidad patrimonial de los señores **José Fernando Vásquez Molina** y **Hernán Arias Sandoval**, como se indicó, se petitionó la declaratoria de existencia de ***relación laboral con las sociedades demandadas, no con las personas naturales,*** ambas demandadas sociedades de capital, sin que se pueda extender a los socios la responsabilidad consagrada en el artículo 36 del C. S. del T. para las sociedades de personas, pues como lo explicó la a quo, es pacífica frente a este punto la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, al precisar, entre otras, en sentencia SL1489-2022, que:

Sobre la disposición en cuestión, esta Corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse para reiterar en que ésta solamente establece la solidaridad entre las sociedades de personas y sus miembros entre sí, no de las anónimas por acciones y sus asociados, dada su condición de agrupaciones de capital. En criterio de la Corte, además del artículo 252 del Cco que descarta la procedencia de la acción de terceros frente a los socios de estas últimas para obtener la satisfacción de las obligaciones del ente social, la regulación se explica en el carácter anónimo de la contribución, que desvincula al socio de la persona jurídica y que, por ende, concluyen a determinar que éste no es propietario de la misma.

Adicionalmente, la Corte parte de la asignación de responsabilidades a cada forma de asociación, siendo así, que el artículo 36 del CST impone a los miembros de las sociedades de personas el deber de concurrir al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el ente social, mientras que para el caso de las sociedades de capital no se establece dicho efecto.

Rememorando lo dicho en la SL18010-2016, SL10206-2016, SL-831-2013, luego no es posible endilgar solidaridad por esta vía, y en cuanto a la **constitución de la SAS para actos defraudatorios**, si bien se advierte que con el cambio de razón social se pretendió burlar un embargo fiscal, **no puede afirmarse lo mismo de las acreencias laborales, dado que el mismo demandante lo advierte y adjunta con el escrito inicial**, la sociedad TECNOCIN SAS, le comunicó que respondería por las obligaciones anteriores al mes de febrero de 2019, en la medida que la situación financiera se lo permitiera; y finalmente, en relación con la **mala fe**, esta es el sustento para imponer la indemnización moratoria, sin que la misma conducta se pueda penalizar doblemente. **Se mantiene entonces la exoneración de responsabilidad** frente a las personas naturales convocadas al trámite.

Frente al pago de **horas extras**, se afirma en el hecho **3 que el horario de labores era de lunes a viernes de 8 am a 12 m y de 2 a 6 pm, los sábados en forma intercalada, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde**, y en el hecho **4, se asevera el trabajo en horas extras diurnas y nocturnas, ordinarias y festivas**, consignadas en planillas de ingreso y egreso a las locaciones de la compañía, allegándose solo algunas que no ofrecen claridad frente al particular, y de la declaración de **Edson Luilli Murillo González, nada concreto se infiere, toda vez que frente al horario de trabajo de Juan Alejandro expresó que:** estaba estipulado de 8 la mañana a 5 de la tarde, de manera continua, con espacio de

media o una hora para almorzar, después de 5 de la tarde debíamos irnos para las residencias, Juan Alejandro se quedaba por ejemplo 9, 10 de la noche, haciendo los procesos de análisis para entregar resultados a los clientes al siguiente día, de manera temprana, eso podría estar ocurriendo 4 días a la semana, semanalmente durante el tiempo que estábamos allí y adicionalmente los días sábados se quedaba trabajando, como el horario de él era hasta medio día trabajaba hasta 4 o 5 de la tarde, sin que se tenga claridad sobre la real jornada, pues mientras que el demandante afirma un receso de 12 m a 2 pm, el testigo dice que se les daba media o una hora para el almuerzo, luego indica que el horario era hasta las 5 pero el señor Daza Figueredo se quedaba hasta las 9 o 10, lo que podía ocurrir 4 días a la semana, sin concretarlos; en la demanda se afirma que los sábados laboraba hasta las 2 pm en forma intercalada, y el testigo dice que lo hacía hasta las 4 o 5 de la tarde, y para más confusión, se hace alusión a un acuerdo privado de subasta entre el testigo Edson Luilly, el demandante y Fernando Velásquez, efectuándose las pruebas que a este correspondían luego de la jornada laboral, y aunque no ocurrió todo el tiempo, no se precisa en que lapso se dio, solo se dice últimos seis meses o año, teniéndose establecido por la jurisprudencia especializada:

Es importante recordar, como de vetusta lo ha enseñado esta Corporación, que para que el juez produzca condena por horas extras, dominicales o festivos las comprobaciones sobre el trabajo más allá de la jornada ordinaria han de analizarse de tal manera que en el ánimo del juzgador no dejen duda alguna acerca de su ocurrencia, es decir, que el haz probatorio sobre el que recae tiene que ser de una definitiva claridad y precisión que no le es dable al juzgador hacer cálculos o suposiciones acomodaticias para determinar el número probable de las que estimen trabajadas, como sucedió en el sub examine. Ver sentencia de fecha 15 de Julio de 2008, Rad. 31637

Luego, al no tenerse contabilización precisa del tiempo suplementario reclamado, **se mantiene la absolución por este concepto.**

Sobre el **bono constitutivo de salario**, el demandante en el hecho **5º** afirma que:

... adicionalmente se reconocía, dentro de las políticas laborales de la empresa, un bono por valor de \$150.000 quincenales, los cuales se constituyeron en factor salarial y debían haber sido objeto del incremento anual, así como componente salarial en las respectivas liquidaciones de primas, vacaciones y demás beneficios laborales. Esos bonos se le dejaron de pagar a Juan Alejandro Figueredo abruptamente, por decisión unilateral del empleador, a partir de diciembre de 2018, constituyendo una desmejora laboral.

Haciéndose alusión a este concepto por la testigo **María Cristina Muñoz Berrio**, afirma: **nos daban bono quincenal a Alejandro de 250.000,00**. A ellos se les entregaba personalmente y se les daba un papel para firmar. Cuando entré llevaban varios años sin aumento de sueldo y para no aumentar prestaciones, inicialmente daban bonos que se redimían por mercados o gasolina y después se entregaban en efectivo, por orden del señor Vásquez. No firmamos nada de que no fuera salario, sin que nada concreto se logre acreditar, pues el demandante dice haber recibido pago de \$150.000 quincenales suspendidos a partir de diciembre de 2018, la testigo indica que eran \$250.000 quincenales, y no refiere fecha de abolición de tal beneficio, siendo necesario para imponer condena, tener plenamente establecidos los supuestos que la sustentan, para el caso, **valor exacto del bono, periodicidad y momento hasta el que se pagó**, elementos de convicción que se echan de menos. **Tampoco hay lugar a imponer esta condena.**

Frente al **incremento anual de salario**, que se afirma pactado en un 90% del IPC y siendo el devengado por el demandante de **\$1.610.000,00**, razón le asistió a la falladora al citar el criterio reiterado de la Sala de Casación Laboral, que entre otras, en sentencia

de tutela contra providencia de una de las Salas de Decisión de este Tribunal, concretamente sentencia STL4637 de 2014, en la que se plantearon argumentos como los expuestos por el recurrente para acoger tal pretensión, se explicó:

Se observa que el Tribunal apoyó su decisión en algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo, de la Constitución Política y de normas concordantes, en los que creyó hallar apoyo normativo, con lo cual quiso determinar que se trataba de la aplicación de un derecho preexistente de quien demandó en ese proceso ordinario con iguales fundamentos, por ello se evidencia la existencia de un conflicto jurídico, lo que por tanto descarta la tesis de la parte accionante de que se haya planteado un conflicto de los denominados económicos, por lo cual es necesario precisar que el conflicto jurídico se refiere a la interpretación o aplicación de un derecho nacido o actual cuya decisión corresponde formalmente al juez laboral, en tanto que el conflicto de intereses tiende a modificar un derecho existente o a crear uno nuevo, cuya decisión compete normalmente al conciliador o al árbitro, pues la normatividad reguladora de tales conflictos busca que sean las partes comprometidas, en primer lugar, quienes directamente los solucionen por autocomposición y sólo a falta de ésta, por medio de tribunales de arbitramento que los deciden en equidad.

Establecido lo anterior, se tiene que la demandante pretendió el ajuste y pago de su salario por el tiempo comprendido entre marzo de 2009 y el mismo mes del año 2012, de acuerdo con el IPC determinado en cada uno de esos periodos, ante lo cual emerge claro que el juez de apelaciones desconoció que en nuestro ordenamiento legal el régimen salarial de los trabajadores particulares descansa sobre el fundamento de que solamente las partes de la relación laboral, en forma individual o colectiva son las facultadas para convenir la remuneración salarial en sus diversas modalidades, con observancia de lo reglado por el Gobierno Nacional frente al salario mínimo legal señalado para cada anualidad, por definirlo así el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el 18 de la Ley 50 de 1990, sin que exista norma que disponga el aumento automático de acuerdo con el IPC, del salario para los trabajadores que devenguen montos superiores al mínimo legal.

El artículo 148 del referido Estatuto, establece que la fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo en que se haya estipulado un salario inferior, aún para los trabajadores con remuneración mínima, y los aumentos son concertados por las fuerzas sociales, económicas y por el Gobierno, previsiones que se reitera están dirigidas exclusivamente a quienes devengan el salario mínimo legal, por ello si todos los trabajadores del sector particular tuviesen derecho a la revalorización de su remuneración por el simple incremento en el IPC carecería de sentido la regulación en este sentido adoptada con fundamento en diversos aspectos entre estos el de la preservación del orden económico.

Por lo anterior, es evidente que no pueden los jueces injerirse en asuntos que por su contenido social y económico tienen incidencia en aspectos tales como la productividad, el crecimiento del producto interno bruto, la inflación y el empleo, dado que un manejo inadecuado de los mismos, además de desquiciar la economía, produce consecuencias jurídicas nocivas, pues sería tanto como si los funcionarios judiciales estuvieran investidos para legislar sobre estos temas, con lo cual reinaría la inseguridad jurídica, y se socavarían los cimientos que sustentan la democracia, con el surgimiento del caos, porque prevalecería sobre la Ley, lo que cada fallador quisiera interpretar.

Esta posición ha sido reiterada por esta Sala de la Corte en diferentes pronunciamientos, entre ellos el proferido en sentencia del 5 de noviembre de 1999 radicación N° 12213

Sin que se tengan argumentos para modificar tal tesis, luego, **tampoco tiene prosperidad esta súplica.**

Así las cosas, **se mantiene incólume el salario devengado por el trabajador para la fecha de finalización del vínculo laboral, \$1.610.000,00**, siendo este la base para la liquidación de las acreencias reclamadas, encontrándose que si bien es cierto al sustentar la alzada el apoderado del demandante reclama por la indebida aplicación del término prescriptivo, refiriendo **dos años**, cuando realmente corresponde a **tres** (ver arts. 488 y 489 del C. S. del T. y 151 del C.P. T. y de la S.S.), **el único concepto al que le fue aplicado este fenómeno extintivo fue el correspondiente a horas extras**, pues para **las cesantías, la contabilización se hizo desde la fecha de finalización del contrato**, procediéndose a la liquidación de los reajustes y valores adeudados, **sin que obre en el plenario documento que acredite el pago de las del año 2018, ni la fracción del año 2019**, y sin que se hayan cuestionado los montos liquidados por la primera instancia, por lo que se **mantiene en firme esta condena**, corriendo similar suerte los rubros correspondientes a

intereses a las cesantías, primas de servicio, y vacaciones, al quedar confesados por el demandante los rubros recibidos y estar acreditados con prueba documental, sin que se aprecien los recibos a que hace alusión el apoderado de las demandadas al sustentar la alzada, al punto que ni siquiera él los concreta en el escrito de alegaciones.

En relación con la **ineficacia del despido por el falaz procedimiento disciplinario, invocándose las reglas establecidas en la sentencia SU449 de 2020, debe decirse**, que en esta providencia se fijaron los requisitos para la terminación del contrato de trabajo con justa causa por parte del empleador, así:

1. Comunicar y dar a conocer al trabajador las razones y motivos puntuales por los cuales se va a dar por terminado el contrato de trabajo, sin que pueda el empleador alegar hechos distintos a los citados en una eventual disputa judicial.
2. Verificar la existencia de inmediatez temporal entre la ocurrencia y conocimiento de los hechos y en la decisión, es decir, que el empleador tome la decisión de manera inmediata (tiempo prudencial) al momento de conocer los hechos.
3. Que se configure una de las causales taxativas enunciadas en el Código Sustantivo del Trabajo.
4. **Garantizar al trabajador el derecho a ser oído. Según la Corte, no es obligación establecer un proceso reglado para tal fin. Lo anterior, sin perjuicio que, ante la existencia de procedimientos contractuales o convencionales, los mismos deban ser cumplidos.**
5. Comunicar al trabajador de forma clara las razones de la terminación.

Así pues, de lo anterior se infiere que las facultades del empleador para finalizar la relación laboral con justa causa no son absolutas, encontrando así algunos límites en el derecho a la defensa, debiéndose respetar este aún en los casos en donde no se tenga un proceso disciplinario establecido, toda vez que como empleador debe garantizar escuchar al trabajador previo a la toma de la decisión.

Finalmente, es pertinente señalar que para la finalización del contrato de trabajo basada en las causales del numeral 9 al 15 del artículo 62 del C.S.T, el empleador deberá realizar un preaviso con mínimo quince (15) días de anticipación, lo anterior de conformidad con el artículo 61 del código en comento.

Invocándose para el caso, **1)** la grave indisciplina que afectó el desarrollo normal de las actividades del empleador, pues se ausentó el trabajador entre el 2 y 21 de mayo de 2021, alegando haber obtenido permiso para disfrutar de vacaciones y **2)** la apropiación indebida de dineros de la compañía, causales que encajan dentro de **los numerales 2º y 5º del artículo 62 del C. S. del T. y no en las de los numerales 9 a 15 de la norma, exigiéndose en estas preaviso de 15 días.** Aparte de ello, siendo carga probatoria del demandante, no trajo a los autos la norma que contiene el procedimiento disciplinario que estima vulnerado, pues nótese que en la providencia que se invoca como sustento se advierte que antes del despido se debe oír al trabajador, pero cuando no existe proceso reglado no se puede argumentar vulneración al mismo, sin que el hecho de no acogerse los argumentos presentados conlleve la ineficacia de la decisión, y tampoco se puede afirmar que el representante legal suplente no tenía facultad para remover el personal, luego, no tienen acogida los argumentos en este sentido.

Sobre la **indemnización por despido sin justa causa**, pretensión subsidiaria, se tiene que con la declaración de **Edson Luilly Murillo** queda demostrado que como superior del demandante le dio visto bueno al disfrute de las vacaciones correspondientes al año 2018, descanso del que gozaría entre el 2 y el 20 de mayo de 2019 (fls. 21), lo que fue comunicado por el demandante al señor **Hernán Arias Sandoval, representante legal de la sociedad AGROLAB**, como consta en copia de correo electrónico visible a fls. 22, en el que se le dice textualmente:

*Recibí la solicitud de vacaciones, lo cual agradezco. Reviso la hoja de vida y verificó el periodo por el cual se pretende disfrutar. Feliz Tarde. **Hernán Arias***

Sandoval, circunstancias que se narran en el hecho **13**, resultando contradictorio que para trámites administrativos el demandante reconociera la autoridad del señor **Hernán Arias Sandoval como representante legal de la compañía, pero la cuestione para efectos del despido**, (además del informe de las fechas programadas para disfrute de vacaciones obran comunicaciones cruzadas entre el demandante y el señor Arias Sandoval, explicando lo ocurrido con el trámite de las mismas), y, debe tenerse en cuenta frente a este concepto: **1) que el descanso necesario es uno de los principios mínimos fundantes del estatuto del trabajo previstos en el artículo 53 de la Carta Superior; 2) que el señor Hernán Arias Sandoval**, no negó ni condicionó el disfrute de vacaciones, solo indicó que verificaría el periodo al que correspondían las que se solicitaban; **3) aunque en la carta de despido se aduce grave indisciplina que afecto el normal desarrollo de las actividades del empleador por la ausencia durante el periodo de vacaciones**, se acreditó lo contrario, al afirmarse por el señor **Edson Luilly Murillo** que dio visto bueno, sin hacer alusión a ningún perjuicio; **4) que tal periodo de vacaciones se hubiera cancelado**, tal como lo concluyó la a quo, sin reparo alguno, pues el mismo demandante confesó su pago y adeudársele solo las del ultimo lapso, esto es, enero a mayo de 2019, rubro por el que se impuso condena, luego no se observa acto de indisciplina o insubordinación del trabajador frente al disfrute de las vacaciones del año 2018.

Y en cuanto a la **apropiación de dineros**, se crea una confusión que no logró esclarecerse, pues, el testigo **Edson Luilly**, explica que en la empresa tenían manejos inadecuados, y con el fin de evadir un embargo, la empresa AGROLAB – SOCINTEC, desvió los pagos a otras cuentas, incluso a la de trabajadores, pidiéndosele a él favor de

facilitar la suya, lo que no aceptó, situación que corrobora la señora **María Cristina**, precisando que como encargada de cartera de **SOCINTEC**, se le instruyó para hacer los cobros a los deudores, facilitando para el pago la cuenta de **TENOCIN**, empresa creada paralelamente por los mismos dueños, funcionando en el mismo lugar, y con el mismo objeto social, y aparte de ello, se tenía un negocio privado entre el primer testigo, el demandante y José Fernando Velásquez, denominado subastas, haciendo también pruebas de laboratorio que cobraban, ingresando estos dineros, al parecer a la cuenta del demandante, con previa autorización del señor Velásquez Molina, gerente de **TECNOCIN**, luego, al existir duda frente a la realización o no de tal comportamiento, la misma debe decidirse en favor del trabajador, y concluirse que no quedó tampoco debidamente demostrado este irregular comportamiento. **Se mantiene la condena a la indemnización por despido**, en los términos fijados por la a quo al no haberse formulado reparo alguno frente a su liquidación.

En relación con la reclamación por **viáticos**, es una pretensión que no fue incluida en el acápite correspondiente, tampoco la juez de primer grado la consideró al momento de fijar el litigio, ni emitió pronunciamiento en la sentencia, por lo que esta instancia carece de facultades ultra y extra petita para su análisis; y si **en gracia de discusión** se estudiara el tema, se tiene que en el **hecho sexto se afirma: en las jornadas de trabajo por fuera de la empresa, se le pagaron rubros a título de viáticos, calculados de forma arbitraria; de manera que los mismos no cubrieron los verdaderos valores por los cuales debían liquidarse, en contra de los intereses del trabajador;** aseverándose por Hernán Arias Sandoval que ellos no se causaban y por el testigo **Edson Luilly**, que cuando el laboratorio empezó a tener bajas en ventas, el representante legal de la empresa, señor Vásquez le solicitó a Alejandro que se desplazara a las asociaciones de ganaderos, asociaciones equinas, y fuera hacia los

gremios de los Municipios del Valle de Aburra y municipios de Antioquia a buscar clientes para que los trajera a la empresa y utilizaran los servicios del laboratorio, hicieron un acuerdo entre ellos, el representante legal y Juan Alejandro. **No se le daba dinero para viáticos**, normalmente se hacían algunos acuerdos, hasta donde supo, porque el testigo manejaba la parte técnica y no la administrativa, pero le preguntó a Alejandro como hacía para irse y le comento que el señor Vásquez se había comprometido a darle recursos para desplazarse a esos lugares a esas actividades, que dependiendo del lugar donde fuera le iban a dar unos recursos económicos, pero no supo si le entregaron esos recursos o no, porque era un acuerdo entre el representante legal y el trabajador y no estuvo presente, no se dio cuenta de esos pagos, luego, afirmándose el pago de viáticos deficitarios, era carga del demandante demostrar los gastos en que incurrió, los montos reconocidos y los valores adeudados, claro está por las labores dentro de su cargo como **analista de laboratorio veterinario**, pues es importante advertir que **el testigo Edson Luilly Murillo, el señor José Fernando Vásquez Molina, y el demandante**, tenían un negocio privado denominado **subastas**, con ocasión del cual también el demandante realizaba pruebas de laboratorio, en horario adicional, recibiendo los pagos de estas, autorizado para ello, por el señor Vásquez Molina, gerente de TECNOCIN.

En lo atinente a la **indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del C. S. del T.**, quedando establecido que a la terminación del contrato no se pagaron por la empresa las prestaciones sociales debidas, en los montos que correspondían, se estructura el supuesto objetivo que trae la norma, sin que se evidencie buena fe en las sociedades accionada, pues si bien es cierto, TECNOCIN se comprometió a cancelar las acreencias vigentes al mes de febrero de 2019, también lo es que aún a la fecha no lo ha hecho, o por lo menos de ello no obra prueba, ni siquiera se intentó un acuerdo

con el trabajador para salvar sus créditos, explicándose por la jurisprudencia especializada, entre otras, en sentencia 37288 del 24 de enero de 2012:

LA ILIQUIDEZ DE LA EMPRESA COMO EXIMENTE DE MORATORIA:

Conforme a lo explicado, en sentir de la Sala la iliquidez o crisis económica de la empresa no excluye en principio la indemnización moratoria. En efecto no encuadra dentro del concepto esbozado de la buena fe porque no se trata de que el empleador estime que no debe los derechos que le son reclamados sino que alega no poder pagarlos por razones económicas; y es que por supuesto, la quiebra del empresario en modo alguno afecta la existencia de los derechos laborales de los trabajadores, pues éstos no asumen los riesgos o pérdidas del patrono conforme lo declara el artículo 28 del C. S. de T, fuera de que como lo señala el artículo 157 ibídem, subrogado por el artículo 36 de la Ley 50 de 1990, los créditos causados y exigibles de los operarios, por conceptos de salarios, prestaciones e indemnizaciones, son de primera clase y tienen privilegio excluyente sobre todos los demás.

De otra parte, si bien no se descarta que la insolvencia en un momento dado pueda obedecer a caso fortuito o de fuerza mayor, circunstancia que en cada caso deberá demostrarse considerando las exigencias propias de la prueba de una situación excepcional, ella por si misma debe descartarse como motivo eximente por fuerza mayor o caso fortuito, pues el fracaso es un riesgo propio y por ende previsible de la actividad productiva, máxime si se considera que frecuentemente acontece por comportamientos inadecuados, imprudentes, negligentes e incluso dolosos de los propietarios de las unidades de explotación, respecto de quienes en todo caso debe presumirse que cuentan con los medios de prevención o de remedio de la crisis. Y no debe olvidarse que la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones, entre las cuales ocupan lugar primordial las relativas al reconocimiento de los derechos mínimos a los empleados subordinados que le proporcionan la fuerza laboral (C.N art 333)”. Negrillas intencionales.

Y es que contrario a lo argumentado por el apoderado de la sociedad **TECNOCIN SAS**, si bien dentro de la argumentación de la juez para imponer tal sanción se consideró la creación de una empresa para esquivar el pago de multa fiscal, infiriendo dentro de una sana lógica que si ello ocurre con una entidad que cuenta con todos los mecanismos para hacer efectivos los conceptos económicos a favor del Estado, que se puede esperar frente a los derechos de los trabajadores, **y si bien ello es un comportamiento a todas luces reprochable, al existir múltiples mecanismos otorgados por la legislación al empresario para sortear sus dificultades económicas, realmente el sustento de tal condena es la mala fe por el incumplimiento de las obligaciones laborales, que son las que se juzgan ante esta jurisdicción, y no las de carácter fiscal** ajenas a la misma, luego, al no evidenciarse proceder tendiente a honrar los créditos laborales del demandante, lo procedente es **mantener tal condena en la forma dispuesta por la primera instancia.**

Ante el resultado **adverso de los recursos para ambas partes**, no hay lugar a imponer condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, **la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma en su integridad**, la sentencia proferida por el **Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito**, dentro del proceso ordinario laboral promovido por **Alejandro Daza Figueredo**, contra la **Sociedad Científica de Investigaciones y Tecnología S.A. – AGROLAB – SOCINTEC**, y la **Sociedad Científica de Investigaciones y Tecnológicas S.A. – TECNOCIN –**

y **José Fernando Vásquez Molina y Hernán Arias Sandoval**, como personas naturales.

Ante el resultado **adverso de los recursos para ambas partes**, no hay lugar a imponer condena en costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijara por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ARÍSTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado